

INFORME 1996

La organización Amnistía Internacional, Premio Nobel de la Paz 1977, nos vuelve a entregar el resultado de su seguimiento al derecho a la vida y la libertad de conciencia en el mundo durante el último año.

Llaman la atención varios problemas: las discriminaciones sociales, las condiciones carcelarias, los emigrados y refugiados, y las violaciones al derecho a la vida.

ASIA

En YEMEN siguió sin aclararse la suerte y el paradero de cientos de personas que "desaparecieron" en años anteriores.

En IRAQ centenares de presuntos opositores al gobierno y sus familiares fueron detenidos y decenas de miles que habían sido arrestados en años anteriores continuaron privados de libertad.

En MYANMAR al menos 10 mil civiles de la etnia karení huyeron a campos de refugiados de la vecina Tailandia.

Las conversaciones que los gobiernos de BHUTAN y NEPAL celebraron en marzo y abril para analizar el destino de más de 88 mil personas de habla nepalí originarias del sur de Bhután y que viven en campos de refugiados del este de Nepal se saldaron sin resultados.

En BANGLA DESH no se reanudó la repatriación de unos 50 mil refugiados tribales que vivían en campos en la India. En septiembre Myanmar llegó a un acuerdo para repatriar a los 57 mil refugiados musulmanes que aún permanecían en Bangladesh. Alrededor de 260 mil musulmanes birmanos habían entrado en Bangladesh en 1992.

En IRAN al menos 47 personas fueron ejecutadas. En SINGAPUR al menos 50 personas fueron ejecutadas en la horca. Había indicios confiables de que en ambos países el número total de ejecuciones fue mucho mayor.

En PAQUISTAN la tortura, incluida la violación, continuó siendo práctica generalizada y causó al menos 70 muertes. Continuaron los violentos conflictos entre distintos grupos étnicos, religiosos y políticos, donde murieron al menos 1.950 personas.

En SRI LANKA al menos 55 personas "desaparecieron" y más de 40 fueron ejecutadas extrajudicialmente. Se había recibido información sobre 30 mil "desapariciones".

En la INDIA al menos 100 personas murieron bajo custodia de la policía y de los militares, muchas como consecuencia de tortura. En Jammu y Cachemira había millares de presuntos activistas

políticos encarcelados sin cargos ni juicio en aplicación de la Ley de Seguridad pública.

En KAZAJSTAN se dictaron 110 sentencias de muerte y hubo 101 ejecuciones.

En MONGOLIA en 1991 un total de 189 presos habían muerto por diversas causas: 58 de ellos habían muerto de inanición, 63 de tuberculosis y 43 de otras enfermedades.

En ARABIA SAUDITA, Mohammad Alí al Sayyid sufría una pena de 4 mil latigazos, además de 7 años de prisión. Cada dos semanas le llevaban al mercado, donde un policía le administraba 50 latigazos. También allí, al menos 192 presos fueron ejecutados.

En CHINA al menos 50 disidentes fueron detenidos en las semanas próximas al 4 de junio, aniversario de la represión de las protestas de 1989 en favor de la democracia, cuando los soldados mataron a centenares de manifestantes.

En INDONESIA las autoridades no habían proporcionado nueva información sobre la suerte que habían corrido las aproximadamente 270 personas que murieron y otras 200 dadas por desaparecidas durante y después de la matanza de Santa Cruz, Timor Oriental, en 1991, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU instó a que lo hicieran.

En el LIBANO seguía sin conocerse la suerte de miles de personas secuestradas en años anteriores por grupos armados.

Durante un ataque de represalia, las fuerzas de Ismael Khan dejaron caer bombas-racimo y mataron entre 220 y 250 civiles desarmados en AFGANISTAN. También allí, unos 1.500 civiles resultaron muertos en el curso de los enfrentamientos entre los talibanes y fuerzas del presidente Rabbani.

En TURQUIA el conflicto que enfrenta a las fuerzas del Estado y a miembros armados del secesionista PKK (Partido de los trabajadores kurdos) se cobró 2 mil vidas, civiles incluidos. Hubo un centenar de homicidios políticos que, en mu-

Jean Pierre Wyssenbach

chos casos pudieron tratarse de ejecuciones extrajudiciales.

OCEANIA

En AUSTRALIA al menos 87 indígenas murieron bajo custodia. Aunque los aborígenes sólo representan un 1,3% de la población adulta total mayor de 14 años, suponían al menos el 24% de todas las muertes bajo custodia y más del 14% de la población reclusa.

AMERICA

En ESTADOS UNIDOS 56 presos fueron ejecutados en 16 estados. Se contabilizaron más de 3 mil condenados a muerte en 38 estados. A partir de 1977 las ejecuciones suman un total de 313.

En MEXICO al menos dos personas “desaparecieron” y siguió sin conocerse el paradero de los centenares de “desaparecidos” en años anteriores.

En HAITI continuaron las investigaciones sobre varios casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, entre ellos la matanza de más de 200 campesinos en Jean-Rabel en 1987 y la matanza de unas 50 personas en Raboteau, Gonaives, en 1994.

De GUATEMALA se recibieron informes de más de 150 ejecuciones extrajudiciales y decenas de “desapariciones”, pero se creía que la cifra total era significativamente superior. Los autores fueron miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados apoyados por el gobierno.

Las autoridades continuaron poniendo impedimentos a los intentos de exhumar a las víctimas de violaciones de derechos humanos enterradas en algunos de los 100 cementerios clandestinos -o más- que se creía que existían en el país. Se desenterraron los restos de al menos 171 personas en Las Dos Erres, El Petén, donde los informes indicaban que el ejército de Guatemala había ejecutado extrajudicialmente en 1982 a 350 personas. 67 de los cadáveres exhumados pertenecían a niños menores de 12 años. Al parecer, el comisionado militar local intentó impedir la exhumación amenazan-

do a testigos, familiares, observadores guatemaltecos de los derechos humanos y miembros del equipo forense.

En VENEZUELA la mayoría de los funcionarios responsables del homicidio de al menos 108 internos de la cárcel de Sabaneta, Maracaibo, en enero de 1994, continuaron gozando de impunidad.

En BRASIL la policía y los “escuadrones de la muerte” ejecutaron extrajudicialmente a centenares de personas y hubo nuevos informes sobre “desapariciones”.

En ARGENTINA, alrededor de dos mil personas recluidas y torturadas en un centro secreto de la Armada habían sido narcotizadas y arrojadas desnudas al océano Atlántico y al Río de la Plata desde aeronaves militares.

En COLOMBIA las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares ejecutaron extrajudicialmente a muchos centenares de civiles y al menos 150 personas “desaparecieron”. Muchos miembros de las fuerzas armadas continuaron eludiendo su responsabilidad por millares de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” registradas en los últimos años. Los grupos armados de oposición cometieron abusos graves contra los derechos humanos, como decenas de homicidios deliberados y arbitrarios y toma y reclusión de centenares de rehenes. Al menos 400 personas fueron tomadas como rehenes, principalmente por las FARC y el ELN. La violencia política se recrudeció en varias zonas del país. Varios centenares de civiles resultaron muertos y al menos 15 mil huyeron de su lugar de residencia.

En PERU las leyes de amnistía cerraron miles de casos no resueltos de violaciones de derechos humanos documentados entre mayo de 1980 y junio de 1995, entre ellas al menos 5 mil “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y centenares de casos de tortura, malos tratos, amenazas de muerte e intimidación.

EUROPA

FRANCIA sólo reconoció la condi-

ción de refugiados al 1% de los solicitantes de asilo argelinos durante 1995, a pesar de que muchos habían sufrido graves abusos contra los derechos humanos o habían recibido amenazas de que serían víctimas de ellos.

Había no menos de 274.700 personas recluidas en cárceles y centros de prisión preventiva de toda RUSIA, si bien estas instituciones fueron concebidas para albergar únicamente a 173.800 personas. Las fuerzas rusas dieron muerte en abril a unos 250 civiles, entre los que había mujeres y niños, cuando intentaban tomar la ciudad chechena de Samashki, cerca de Grozni. Los tribunales rusos dictaban anualmente más de 200 sentencias de muerte.

Más de 384 mil serbios de BOSNIA-HERZEGOVINA huyeron a Serbia o a zonas bajo control serbobosnio. Las fuerzas serbo-bosnias expulsaron a musulmanes y croatas de las zonas en que vivían. Se recibieron informes sobre torturas y malos tratos cometidos durante esas expulsiones, entre ellos violaciones y abusos sexuales. Las fuerzas serbobosnias secuestraron a millares de personas y se cree que mataron deliberada y arbitrariamente a muchas de ellas. Se practicó la destrucción deliberada de más de 13 mil viviendas como castigo.

Existían sólidas pruebas circunstanciales de que a muchas de las 3 mil personas que habían caído en manos del ERS (Ejército de la República de Serbia) y a otras 5 mil de cuya suerte no se tenía noticia, las habían matado deliberada y arbitrariamente las fuerzas del ERS o efectivos paramilitares procedentes de Serbia. Fotografías tomadas por los servicios de información de Estados Unidos mostraban señales de posibles emplazamientos de fosas comunes en la zona.

AFRICA

En UGANDA el grupo armado Ejército de Resistencia del Señor fue responsable del secuestro durante el año de al menos 400 menores de entre 8 y 16 años.

En KENIA unos 1.500 desplazados



internos, que estaban entre los aproximadamente 12 mil desplazados en 1993 a los que en diciembre se obligó a reasentarse en la provincia central, fueron nuevamente obligados a reasentarse.

Al menos 6 mil de los 109 mil refugiados que habían huido a países vecinos en años anteriores regresaron voluntariamente a MALI.

En 1989 y 1990 habían sido expulsados de MAURITANIA más de 50 mil personas y varios miles más habían huido para escapar de las violaciones de derechos humanos generalizadas y otras formas de persecución.

En NIGERIA se tuvo constancia al menos de 95 ejecuciones y 46 sentencias de muerte en 1995.

En SUDAN centenares de personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial en las zonas de guerra. Efectivos del EPLS (Ejército Popular de Liberación del Sudán) y sus aliados civiles armados mataron de forma deliberada y arbitraria en pueblos de los alrededores de Ganyliel a no menos de 200 personas, entre las que había más de 120 niños.

En SUDAFRICA centenares de personas perdieron la vida como consecuencia de la violencia política que seguía registrándose en KwaZulu Natal. El co-

mité de Derechos Humanos, organización no gubernamental, documentó más de 800 muertes. Otras fuentes situaban el número de muertos por encima de los mil.

En ARGELIA las fuerzas de seguridad mataron a miles de personas. Muchas de ellas fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando estaban desarmadas o después de haber sido capturadas. Grupos armados de oposición dieron muerte a centenares de civiles de forma deliberada y arbitraria.

En la zona de los grandes lagos de Africa Central, unos dos millones de personas han huido de las matanzas de RUANDA y BURUNDI y se han refugiado en países vecinos.

En RUANDA decenas de miles de personas acusadas de haber tomado parte en el genocidio y otros crímenes contra la humanidad en 1994 fueron encarceladas sin cargos ni juicio, con lo que el número total de detenidos desde julio de ese año ascendió a más de 62 mil. Muchos estaban reclusos en condiciones espantosas; más de 2.300 murieron bajo custodia entre julio de 1994 y fines de 1995. La tortura era una práctica habitual en los centros de detención no oficiales. Se recibieron frecuentes informes de "desapariciones". El ejército ejecutó extrajudicialmente a cientos de civiles. Los grupos armados de oposición cometieron graves abusos contra los derechos humanos.

A fines de marzo, el gobierno de TANZANIA cerró sus fronteras a los refugiados que huían de Burundi, contraviniendo de este modo las obligaciones que tiene contraídas en virtud de los tratados internacionales y regionales. Esta medida se adoptó a raíz de una nueva afluencia a Tanzania de cerca de 50 mil refugiados, en su mayoría ruandeses.

La violencia que en 1993 en ZAIRE se había cobrado por lo menos 7 mil vidas, estalló nuevamente en agosto de 1994. Se calcula que entre 500 y mil personas resultaron muertas entre mediados de agosto de 1994 y fines de junio de 1995. En diciembre se dio muerte a otras

150 como mínimo. Los soldados zaireños, trasladados al lugar para sofocar la violencia, tomaron parte en el saqueo en lugar de restablecer la seguridad. Al menos 500 personas perdieron la vida tras el homicidio en febrero de Mwani Ngulu Manemo, jefe nyanga, a manos de una milicia armada hunde.

En BURUNDI miles de personas fueron víctimas de homicidios políticos cometidos por las fuerzas de seguridad y por grupos armados. A la mayoría de ellas las mataron sólo por su origen étnico o su afiliación política. Las autoridades no investigaron los homicidios ni llevaron a los responsables ante los tribunales. Miles de personas fueron arrestadas por motivos políticos y permanecieron detenidas sin cargos ni juicio. Se torturó a detenidos políticos y decenas de personas "desaparecieron". En las matanzas posteriores al golpe de estado de 1993 murieron unas 50 mil personas.

En LIBERIA se calcula que, desde su comienzo, la guerra civil ha costado unas 150 mil vidas y ha desarraigado a más de 700 mil personas de sus hogares. De 16 a 35 mil refugiados huyeron a Costa de Marfil para escaparse de los combates.

HACIA ADELANTE

Las campañas contra la pena de muerte, que durante largos años realizaron las Secciones de A.I. de ESPAÑA Y MAURICIO dieron finalmente su fruto al quedar abolido durante el año este castigo en ambos países. También en SUDAFRICA se abolió la pena de muerte.

Es hora ya de que la idea de una corte penal internacional se convierta en realidad.

Más de un millón de miembros de A.I. siguen vigilando el respeto a los derechos humanos en todo el mundo, escribiendo cartas a los gobiernos, visitando otros países, publicando informes. ¿No queremos también nosotros hacer algo por la vida de tantos seres humanos? ■

Jean Pierre Wyssenbach es miembro del Consejo de Redacción de la Revista SIC.